

DEMOCRATIZACION INICIAL EN AMÉRICA LATINA: COSTA RICA EN EL CONTEXTO DE CHILE Y URUGUAY

John A. Peeler

Abstract

The democracies of Chile, Uruguay and Costa Rica have been characterized by long periods of stability. This article analyses not only the similarities, but also the differences between these three countries, principally in the ways democracy developed and functioned.

Resumen

Las democracias de Chile, Uruguay y Costa Rica se caracterizan por haber logrado largos periodos de estabilidad. En este trabajo se analizan, más allá de las similitudes que puedan existir entre estas democracias, algunas de las diferencias que subyacen entre ellas, primordialmente la forma en que se desarrollaron y funcionaron en estos países.

Antes de 1973, Chile y Uruguay competían por el título de ser la democracia más antigua y más estable de América Latina. En este trabajo se argumenta que existen similitudes fundamentales que subyacen importantes diferencias en la forma en que la democracia se había desarrollado y cómo funcionaba en estos dos países. En efecto, no es por casualidad que los dos regímenes cayeron víctimas de golpes militares el mismo año.

Ya previamente (Peeler, 1985, 1992) había comparado a Costa Rica con Colombia y Venezuela, como democracias liberales establecidas después de Chile y Uruguay y que sobrevivieron a la destrucción de la democracia en esos dos países. La comparación es útil, pero este artículo justifica también la comparación entre Costa Rica y las otras dos democracias.

LA DEMOCRACIA CHILENA HASTA 1973

El principal rasgo que caracterizaba a Chile en la América Latina del siglo XIX era la estabilidad política que prevaleció desde principios de la década de 1830 hasta la Guerra Civil de 1891, precisamente durante el período en que la mayoría de los otros

países latinoamericanos enfrentaban conflictos políticos. Inicialmente, la estabilidad política de Chile se debía en gran parte a la relativa cohesión elativa de una fuerte oligarquía agroexportadora basada en las propiedades productivas del Valle Central y sus alianzas con las empresas comerciales de Valparaíso y Santiago (Zeitlin y Ratcliff, 1988). Diego Portales, la figura política hegemónica desde aproximadamente 1830 hasta su asesinato en el conato de golpe de estado en 1837, personificaba esos intereses y, de hecho, posiblemente se había involucrado en la política como medio para proteger sus propios intereses comerciales. A pesar de que Portales nunca ejerció la presidencia, su ímpetu era la fuerza principal tras el poder de las instituciones estatales fuertes y estables que durante la mayor parte del siglo pasado limitaron la lucha por el poder político a los canales legales (Nunn, 1976, Cap. 3). En toda América Latina, solamente Brasil, bajo el Emperador Pedro II, igualaba la estabilidad política chilena durante esta época.¹

Después de 1880 el régimen chileno también se vio beneficiado por el apoyo permanente de los inversionistas y del gobierno británicos, en una época en que Gran Bretaña era sin duda la primera potencia mundial. Los comerciantes y banqueros británicos eran colaboradores activos de la clase gobernante chilena, tanto en la agricultura como en el comercio (Loveman, 1988, Cap. 5). Es más, el capital británico participaba activamente en la penetración chilena en los yacimientos de nitrato de Perú y Bolivia, actividad que eventualmente detonó la Guerra del Pacífico (1879-1883), en la cual Chile derrotó a Perú y Bolivia y les quitó las provincias de Arica, Tarapacá y Antofagasta (Kinsbruner, 1973, Cap. 6; Loveman, 1988, Cap. 6).

La estructura política antes de 1850 era sumamente elitista. Los grandes terratenientes ejercían control estricto de los arrendatarios y trabajadores en sus tierras, en tanto que las restricciones al sufragio basado en la propiedad, la educación y, por supuesto, el género, limitaban el derecho al voto a un pequeño porcentaje de la población. El derecho restringido facilitaba el control de las elecciones por parte del ejecutivo nacional aliado a los caudillos locales. Así, bajo Portales y los presidentes que durante diez años cada uno ejercieron el poder después de su muerte, el líder hegemónico pudo controlar las elecciones de varios presidentes sucesivos, gracias al control del ejecutivo nacional.

La élite gobernante comenzó a fragmentarse aproximadamente a mediados de siglo, dividida por el poder y los privilegios de la Iglesia y por los intereses económicos en conflicto. Aproximadamente en 1860 emergieron los primeros partidos políticos claramente definidos (conservadores y liberales), seguidos de inmediato por los radicales (Scully, 1992, Cap. 2; Remmer, 1984, Cap. 1; Collier, citado en Bethell, 1993, Cap. 1). Así cristalizó en Chile, por primera vez, un sistema tripartidista, patrón que se mantuvo a pesar de los reacomodos partidistas, incluso durante la dictadura de Pinochet, y que surgió nuevamente con la oposición a Pinochet en la década de 1980. En un sistema partidista de esta naturaleza, el partido del centro tendía a jugar un papel moderador y ejerció la presidencia durante la mayor parte del tiempo. Según Scully (1992; SA Gil, 1966), el Partido Liberal jugó ese papel hasta 1912, los radicales lo hicieron más o menos desde 1920 hasta 1952; los demócratas cristianos fueron el partido de centro dominante desde 1958 hasta 1973 (y ocuparon nuevamente esa posición conforme la oposición a la dictadura surgió de nuevo en la década de 1980).

Scully ha demostrado que la principal fisura que subyacía el sistema partidista antes de 1912 era la división entre los que favorecían al clero y los que se oponían a él, pero con el surgimiento político de la clase media y la clase trabajadora a finales del siglo XIX, la importancia de la clase aumentó el punto de conflicto. A lo largo del siglo XX, el conflicto de clases se ha visto claramente reflejado en el sistema partidista chileno en un grado sin precedentes en América Latina (SA Petras, 1969). A grandes rasgos, el dominio de conservadores y liberales hasta 1920 puede verse como un reflejo de la hegemonía de la clase gobernante agroexportadora tradicional, hegemonía cada vez más cuestionada después de 1900 (según algunas interpretaciones, ya desde la presidencia condenada al fracaso de José Manuel Balmaceda, 1888-1891. Ver Zeitlin, 1984; cf. Blakemore, citado en Bethell, 1993, Cap. 2; y Drake, en Bethell, 1993, Cap. 3). Después de 1920, la antigua clase dominante sólo recuperó la hegemonía mediante la fuerza militar, de 1973 hasta principios de los 80. Durante el extenso período de democracia chilena (1920-73), y especialmente después de la consolidación de esa democracia en los años 30, la antigua clase dominante protegía sus intereses, no mediante la fuerza bruta, sino más bien maniobrando el sistema tripartidista y utilizando astutamente los pesos y contrapesos de la Constitución democrática chilena de 1925.

El balance institucional entre el poder ejecutivo y el legislativo sufrió importantes cambios entre 1890 y 1925. Cuando los terratenientes que dominaban el Congreso triunfaron en la guerra civil de 1891, impusieron un sistema parlamentario que se mantuvo hasta la elección de Arturo Alessandri en 1920. La era de gobierno parlamentario coincidió con el control de las elecciones por parte de los caudillos locales. Dicho tipo de gobierno dependía de ese control, en vez del control del ejecutivo que había existido anteriormente. Alessandri presidió la redacción de la nueva constitución de 1925, que estableció una presidencia más fuerte, pero también numerosos pesos y contrapesos para las dos cámaras del Congreso (electas para períodos diferidos y a la vez diferentes del período presidencial) y para los Tribunales de Justicia (relativamente aislados de la presión política). La nueva constitución en realidad no fue puesta en práctica sino hasta 1932, después de siete años de intervención militar que incluyó la dictadura de Carlos Ibáñez y varios otros gobiernos militares de corta duración (Nunn, 1976; Ramírez Necochea, 1985; Drake, citado en Bethell, 1993, Cap. 3). Después de 1932, la democracia chilena se mantuvo incólume hasta que fue derrocada en 1973. Se caracterizaba por contar con un sistema pluripartidista con una amplia gama ideológica, partidos y grupos de interés duraderos y bien institucionalizados, así como niveles moderados de participación popular. Las mujeres paulatinamente obtuvieron el derecho al voto en los años 30 y 40 (y en 1952 votaron para Presidente por primera vez), mientras que a los analfabetas no se les permitió votar sino hasta 1970. El electorado se dividía consistentemente en tres grupos de aproximadamente el mismo tamaño: la derecha, la izquierda y el centro; ninguno obtenía la mayoría por sí solo, pero cada uno de ellos podía obtener suficientes votos y puestos en el Congreso para proteger sus propios intereses.

La derecha, compuesta por el partido Liberal y el Conservador, tenía su principal apoyo en las zonas rurales, donde el control clientelista de los campesinos seguía aportando un apoyo popular que les permitía a los líderes de la clase alta de estos partidos competir en la política electoral democrática. Así, un interés político y económico central de la derecha era evitar políticas que erosionaran ese control, tales como la reforma

agraria o la sindicalización de los campesinos. Los liberales y los conservadores, normalmente aliados desde 1912, se fusionaron formalmente en la década de 1960 para formar el Partido Nacional. El centro, dominado antes de 1960 por los radicales y posteriormente por los demócratas cristianos, tenía su apoyo en la clase media urbana y en la clase trabajadora urbana. Los intereses de estas dos clases cada vez más numerosas se centraban en la promoción de la industrialización y un nivel de vida cada vez mayor, que incluía la ampliación de los servicios gubernamentales. La izquierda, formada básicamente por los socialistas y los comunistas, tenía su base popular en los trabajadores urbanos y los mineros, así como en algunos miembros de la clase media. El objetivo final de la izquierda era la transformación socialista de la sociedad, pero a un plazo más inmediato sus principales intereses incluían mantener y ampliar el espacio para las organizaciones laborales y aumentar los servicios gubernamentales.²

Este equilibrio tripartito moldeó las políticas características del período democrático en Chile. Los gobiernos de centro-izquierda del Frente Popular a finales de la década de 1930 y principios de los 40, promovieron los derechos laborales y la organización de sindicatos de obreros, y establecieron un amplio sistema de seguridad social. Pero ni estos gobiernos ni los de los años 50 atacaron seriamente los intereses vitales de la derecha. Específicamente, no se emprendió ninguna acción para darles poder a los trabajadores rurales ni para redistribuir la propiedad rural. Esta moderación no era resultado de pactos ni de acuerdos explícitos entre las fuerzas políticas, sino de su aceptación calculada de un orden político que le aseguraba a cada uno su lugar mientras se le negaba a todos los sectores la posibilidad de centralizar el poder. La estructura constitucional formal servía para estabilizar aún más el régimen democrático, ya que prácticamente impedía que cualquier sector acumulara suficiente poder como para impulsar grandes cambios en las políticas (cf. Gil, 1966). Los períodos presidenciales eran de seis años, sin reelección inmediata. Toda la Cámara de Diputados se elegía cada cuatro años. Un tercio del Senado se elegía cada tres años, por períodos de nueve años. El Congreso se escogía con base en la representación proporcional, mientras que las elecciones presidenciales eran por mayoría, con la previsión de que el Congreso elegía al Presidente entre los dos candidatos que obtuvieran mayor número de votos, en caso de que ninguno obtuviera la mayoría absoluta. Los jueces estaban realmente a salvo del control político directo.

El balance empezó a perderse en la década de 1960. El gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei, electo en 1964 con apoyo de la derecha (y del gobierno de los Estados Unidos preocupado por impedir otra victoria de la izquierda después de la Revolución Cubana),³ era mucho más restrictivo, exclusivo y partidista que sus predecesores, y no hizo mayor esfuerzo por negociar con sus rivales de la derecha ni de la izquierda. La confianza en sí que tenían los demócratas cristianos se veía reforzada por la mayoría absoluta sin precedentes que había obtenido Frei, seguida por la obtención de la mayoría en la Cámara de Diputados en 1965. Los demócratas cristianos tendieron a ignorar la importancia del apoyo de la derecha en estas dos victorias, usando la base de poder obtenida para impulsar su programa, que tenía por objetivo lograr el apoyo electoral de la izquierda mientras a la vez se socavaba la base electoral de la derecha. El programa incluía una ley para lograr una amplia reforma agraria (estimulada por la Alianza para el Progreso, del gobierno de los Estados Unidos) y, más aún, los demócratas cristianos y los partidos de izquierda comenzaron por primera vez a organizar activamente la fuerza laboral rural. Estas dos iniciativas retaron directamente los intereses de

la derecha con una intensidad sin precedentes, incluso a pesar de que los demócratas cristianos intentaban abiertamente debilitar la izquierda. No es sorprendente que tanto la izquierda como la derecha respondieran con hostilidad frente a este intento de los demócratas cristianos por establecer un dominio electoral duradero.

Ya para 1969, la táctica de los demócratas cristianos había fallado. Sin el apoyo de la derecha, perdieron la mayoría en la Cámara de Diputados. A pesar del creciente apoyo de la izquierda a Salvador Allende y su coalición, la Unidad Popular, se demostró que era imposible lograr otra alianza de centro-derecha. En 1970, Allende ganó la presidencia por un margen estrecho en una competencia en tres direcciones. Su gobierno, al igual que el de Frei, estaba comprometido con la Constitución, pero también se había comprometido a lograr cambios importantes en la estructura social y económica. Presionado por sus colaboradores más izquierdistas para que emprendiera la acción radical, y obstaculizado consistentemente por las fuerzas de la derecha y el centro que ocupaban puestos de poder en el Congreso y en los Tribunales, Allende contaba con una base constitucional aún más estrecha sobre la cual apoyarse. Sin embargo, cuando Unidad Popular logró realmente aumentar el número de votos en las elecciones del Congreso de 1973, sus oponentes se dieron cuenta de que no tenían ninguna esperanza de derrocarlo constitucionalmente. Fue entonces que los principales demócratas cristianos se unieron a la derecha para apoyar el golpe militar. La democracia efectiva que por tanto tiempo había mantenido una tregua en cuanto a políticas, no pudo sobrevivir a la ruptura de la tregua.⁴

LA DEMOCRACIA URUGUAYA HASTA 1973

La historia de Uruguay durante el siglo XIX contrasta notablemente con la estabilidad autoritaria de Chile, aunque las dos naciones compartían características significativas. Uruguay desarrolló una economía ganadera fuertemente orientada a la exportación, pero la clase dominante se dividió más profundamente entre los intereses ganaderos y mercantiles de lo que fue el caso en Chile. Los ganaderos tendían a gravitar hacia los blancos y los comerciantes hacia los colorados. Uruguay contaba con una inversión extranjera modesta, especialmente británica, pero estaba lejos de ser tan atractivo como Chile para los inversionistas. Uruguay era sumamente atractivo para los inmigrantes del sur de Europa de finales del siglo XIX, cuya población inundaba Montevideo (Finch, 1981).⁵

Los dos partidos tradicionales, blancos y colorados, que todavía dominan la política uruguaya, cristalizaron durante la década de 1840, siendo el primero básicamente conservador, basado en la zona rural ganadera, mientras que el segundo es de carácter liberal y con el apoyo de Montevideo. Los colorados han dominado a nivel nacional casi desde un principio, pero nunca destruyeron el apoyo local de los blancos. Así, cuando se celebraban elecciones, por lo general eran controladas por los caudillos de la localidad asociados con uno de los partidos nacionales y, en última instancia, con el Presidente en ejercicio, quien actuaba en armonía con su partido. Al respecto, la política chilena y la uruguaya eran similares en el siglo XIX, pero si bien las coaliciones que competían en Chile casi siempre resolvían sus diferencias en torno al poder sin recurrir a las armas, en Uruguay era frecuente la guerra civil, que culminó en la guerra de 1903-04, con el último intento de uno de los partidos tradicionales por tomar el poder por las armas.

Los uruguayos en un inicio desarrollaron la práctica del pacto entre las élites como medio para poner fin al conflicto armado. Es decir, el ganador (por lo general los colorados) aceptaban compartir las gratificaciones del poder con los perdedores (usualmente los blancos), tanto a nivel nacional como local. En lo nacional, esto significaba ofrecerles algunos ministerios a los blancos; en lo local significaba que el ejecutivo nacional renunciaba a cualquier intento por parte del Estado de controlar los bastiones de los blancos en el interior del país.

La estructura de la política uruguaya evolucionó así en forma muy diferente a la chilena. El sistema bipartidista contrastaba fuertemente con el sistema tripartidista de Chile. En vez de tener un partido de centro capaz de utilizar su posición estratégica para moderar el sistema, los uruguayos establecieron pactos para compartir el poder, como medio de mantener o restaurar la estabilidad política. La división entre pro y anticlericales que dominaba la política chilena del siglo pasado también contribuyó a definir los dos partidos tradicionales en Uruguay. Sin embargo, mientras el conflicto de clases se llegó a reflejar directamente en el sistema partidista chileno del siglo XX, los dos partidos tradicionales en Uruguay mantuvieron su dominio, escondiendo y transmutando el conflicto de clases.

La última gran guerra civil partidista en Uruguay terminó en 1903, con la victoria de los colorados. Esta vez, sin embargo, el caudillo colorado que llegó a la Presidencia, José Batlle y Ordóñez,⁶ se negó a ofrecerles a los blancos ninguna participación en el gobierno. Promovió en cambio reformas que crearon un estado moderno y activista comprometido con darles bienestar a todos los ciudadanos y con ofrecer liderazgo y apoyo material para el desarrollo económico del país. Batlle fue uno de los líderes políticos más innovadores y originales en la América Latina del siglo XX, y los cambios llevados a cabo durante sus dos períodos presidenciales (1903-1907, 1911-1915) definitivamente conformarían el Uruguay moderno. Batlle trataba de utilizar los beneficios de estas políticas para lograr el apoyo político permanente para los colorados. Esto por supuesto constituía un riesgo considerable para los blancos, pero el resultado uruguayo no fue una nueva guerra civil.

Una razón importante por la cual se logró esta solución relativamente pacífica se encuentra en el otro conjunto de cambios logrados por Batlle en la organización del gobierno nacional y del sistema partidista. En 1913, una vez logrado el programa social y económico, Batlle propuso sustituir la Presidencia por un ejecutivo colegiado en el que estarían representados ambos partidos. Influenciado por la práctica suiza de un ejecutivo pluralista que evitaba la concentración excesiva de poder en manos de un hombre, Batlle propuso una estructura similar para Uruguay. Los motivos que lo guiaron a tomar esta decisión nunca han sido explicados en forma satisfactoria, pero quizás pensaba que, en el mejor de los casos, su propia facción tendría predominio, en tanto que sus oponentes ganarían de nuevo suficiente acceso al control caudillista local como para acallar su oposición. O quizás haya pensado que, en el peor de los casos, un ejecutivo colegiado salvaguardaría las reformas gracias a su propia inmovilidad. Inicialmente propuso que dicho ejecutivo estuviera conformado en su totalidad por el partido gobernante, pero sus oponentes conservadores en ambos partidos transformaron la propuesta de modo que exigiera la representación de los dos partidos mayoritarios (es decir, la coparticipación). El ejecutivo estaría liderado por un Presidente y un Consejo Nacional de Administración. El Presidente, electo cada cuatro años, controlaría las relaciones extranjerías y la seguridad, en tanto que el Consejo supervisaría todas las otras actividades del Estado.

Un tercio de los nueve miembros del Consejo serían del partido minoritario y un tercio de los miembros serían electos cada dos años. La adopción de esta constitución en 1917, complementada por otro pacto de 1913 que establecía la distribución de los puestos de trabajo del sector público entre los dos partidos, logró en efecto un estilo de gobierno de gran coalición, antes de que el conflicto partidista llegara al punto de amenazar la estabilidad.

Otro aspecto distintivo de la democracia uruguaya se originó durante este período: el sistema electoral del “doble voto simultáneo”. Desde su origen, cada partido ha sido una alianza de facciones clientelistas; la ley electoral no sólo reconoce sino que refuerza este rasgo. Cualquier facción de un partido puede proponer su propia lista de candidatos en una elección general; la representación en el Congreso y en el gobierno local se distribuye entre las facciones con base en la representación proporcional. Los votos a favor de todas las listas de un mismo partido se cuentan para el total del partido, tanto en las justas legislativas como en la presidencial; el candidato del partido con mayor número de votos gana la presidencia. Ocasionalmente (por ejemplo en 1971) esto ha dado como resultado la elección de un Presidente que en sí no recibió la mayoría de los votos, pero también ha mantenido en forma efectiva la hegemonía electoral de los dos partidos divididos en facciones.⁷

Si bien la mayoría de las reformas institucionales de Batlle se dejaron intactas en décadas posteriores, su espíritu nacionalista y socialdemócrata y su integridad intelectual se perdieron. Batlle estaba convencido de que Uruguay debía y podía industrializarse utilizando sus propios recursos de capital y que era adecuado que un gobierno preocupado por el interés común liderara el desarrollo. Sin embargo, los gobiernos posteriores tendían a ver las reformas básicamente como fuentes de trabajo; la burocracia tendía inexorablemente a aumentar, con escasísimo interés ni esfuerzo por pagar el costo de estos programas. Batlle pretendía llevar al país hacia el crecimiento industrial autosostenible, pero después de 1916 se hizo muy poco con ese fin. El país se mantuvo totalmente dependiente de las exportaciones de una economía agrícola a la que se le permitió hundirse lentamente en la decrepitud.

Un sistema político basado en el poder compartido entre todos los intereses establecidos, en el cacicazgo más que en la coherencia de las políticas, era capaz de discutir ampliamente estos temas, pero no estaba equipado para resolverlos. Por el contrario, cuando los problemas nacionales periódicamente alcanzaban proporción de crisis, la respuesta usual era disminuir la presión cambiando la organización del gobierno de colegiado a presidencial y nuevamente a colegiado. Así, en el contexto de la crisis económica mundial de la década de los 30, el Presidente Gabriel Terra, que era colorado (de hecho, partidario de Batlle), colaboró con algunos sectores de los blancos para establecer de nuevo una constitución presidencial. Terra fue de hecho un dictador por diez años (1933-42), pero la constitución presidencialista se mantuvo una década más. En 1951, un resurgimiento del batllismo radical liderado por Luis Batlle Berres (sobrino del Batlle mayor) llevó a que los sectores más conservadores de los colorados (incluyendo los hijos de Batlle y Ordóñez) cooperaran con los blancos para impulsar el reestablecimiento de un ejecutivo colegiado, probablemente como medio para mantener a Batlle Berres bajo control.

Ya a mediados de la década de 1960 se manifestaron con toda claridad las presiones económicas. Las exportaciones se estancaban, el Estado crecía pero sin los medios adecuados para financiar ese crecimiento y el nivel de vida declinaba. Frente a

estas dificultades, tanto la derecha como la izquierda ganaron fuerza, creando una situación que cada vez más semejaba una crisis política. Se estableció de nuevo una constitución presidencialista en 1966. El sistema bipartidista no estaba funcionando muy bien. Un vicepresidente del ala derecha de los colorados (Pacheco) llegó a la Presidencia en 1967 y la fragmentación de los dos partidos mayoritarios se combinó con el sistema electoral para producir, en 1971, un sucesor colorado (Bordaberry) del ala derecha, quien representaba a una pequeña minoría del electorado. Fuertemente comprometidos a imponer el orden y la disciplina en la sociedad, tanto Pacheco como Bordaberry tendieron a compensar su falta de mandato popular ejerciendo el poder en forma cada vez más dictatorial. A la vez, enfrentados a un estancamiento económico cada vez más serio, así como a una crisis fiscal del Estado, eran escasas las nuevas ideas y abundaba la complacencia y el achacarle a otros la culpa. La frustración ante la evidente incapacidad del gobierno para hacerle frente a estos problemas por lo general se manifestó con un aumento de las huelgas y de la agitación, así como con la aparición de dos grandes movimientos políticos.

Los Tuparamos, movimiento de guerrilla urbana de finales de los 60 y principios de los 70,⁸ pretendían adaptar la experiencia de la exitosa revolución cubana al contexto particularmente urbano de Uruguay, donde no hay Sierra Maestra en la cual refugiarse y los campesinos y trabajadores rurales oprimidos constituyen una pequeña parte de la población. Se creía que la ciudad en sí y los trabajadores protegerían y apoyarían la guerrilla. Los Tuparamos rechazaban la legitimidad de la democracia liberal uruguaya, haciendo el análisis revolucionario marxista de que era un fraude y una distracción para la clase trabajadora, que solamente la toma violenta del poder permitiría una verdadera revolución y, por lo tanto, el establecimiento final de un régimen auténticamente democrático. Los Tupamaros demostraron ser inusualmente adeptos a la organización clandestina y a los ataques propagandísticos que avergonzaran al régimen. Mas los Tupamaros por sí solos nunca estuvieron cerca de contar con el apoyo popular que había tenido la izquierda durante el mismo período en Chile. Es mejor compararlos con el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) chileno, que era básicamente un conjunto de combatientes guerrilleros que contaban con una red de apoyo clandestina.

Junto a los Tupamaros emergió un movimiento de izquierda con apoyo de las masas, el Frente Amplio, el cual retaba a los partidos tradicionales en la lucha electoral. El Frente Amplio agrupaba a diversos partidos y facciones democráticas, socialistas y comunistas, en torno a un programa muy general de crítica al status quo y a un compromiso para llevar el país al socialismo y era, entonces, bastante similar a la Unidad Popular chilena en su orientación y composición básicas. Pero mientras en Chile los comunistas y socialistas eran partidos de larga trayectoria que contaban con el apoyo de las masas y que a menudo habían formado alianzas para fines electorales, sus contrapartes en Uruguay nunca habían atraído a las bases. Así, el que el Frente Amplio obtuviera el 18% de los votos en las elecciones de 1971, fue un hecho sin precedentes.⁹ La estabilidad del sistema bipartidista en Uruguay estaba seriamente amenazada.

En estas condiciones, con un régimen parálítico que se enfrentaba a exigencias de cambio cada vez mayores, las Fuerzas Armadas se fueron incorporando cada vez más a la arena política. Bajo la influencia de la nueva doctrina de seguridad nacional que se había popularizado en América Latina a partir de la Revolución Cubana, muchos oficiales estaban perdiendo la paciencia ante la aparente incapacidad del régimen democrático para hacerle frente a lo que en su opinión constituían serias amenazas a la seguridad

nacional. En febrero de 1973, enfrentado a una serie de motines militares que exigían reformas sociales y económicas, así como la supresión de la rebelión tupamara, y viéndose incapaz de movilizar el apoyo civil a favor del régimen democrático, Bordaberry aceptó el establecimiento de un Consejo de Seguridad Nacional, de índole militar, que de hecho supervisaría su ejercicio de la Presidencia. El golpe de estado “en cámara lenta” culminó cinco meses después cuando Bordaberry clausuró el Congreso después de que éste se negó a levantarle la inmunidad a uno de sus miembros, acusado por las Fuerzas Armadas de complicidad con los Tupamaros. Tres años más tarde, las Fuerzas Armadas se quitaron su disfraz de civiles e instalaron una clara dictadura militar.

Uno de los grandes temas de la teoría de la democracia se refiere a la forma de combinar la igualdad política con la económica, a fin de acercarse a una verdadera igualdad de poder. De hecho, si la democracia ha de ser liberal, debe hacer esa combinación sin sacrificar las libertades individuales. Durante su primer período democrático, Uruguay estuvo más cerca que ningún otro país latinoamericano de lograr los tres fines: igualdad política, igualdad económica y libertad. Sin embargo, Uruguay realmente nunca dejó atrás la política clientelista del siglo XIX, y el clientelismo llegó a permear la estructura liberal y democrática de la nación moderna. La visión nacionalista de Batlle se convirtió en un ritual y la nación se convirtió en una vaca que había que ordeñar.

La patología de la democracia en Uruguay era entonces significativamente diferente a la de la democracia en Chile. Mientras la democracia en Chile era un campo de batalla para la lucha abierta de clases, los partidos tradicionales en Uruguay borrarón el conflicto de clases estableciendo lazos políticos clientelistas. Fueron incapaces de adaptarse a la democracia liberal abriéndose y abriendo el sistema a las nuevas ideas y perspectivas. Los partidos, y la nación que crearon, se fragmentaron e inmovilizaron a tal grado que era imposible dar una respuesta eficaz a la crisis. Irónicamente, sin embargo, fueron esos mismos lazos de clientelismo y lealtad habitual los que permitieron que los partidos tradicionales surgieran nuevamente como actores políticos dominantes en la transición de los años 80.

LA DEMOCRACIA COSTARRICENSE

Después de la Independencia, Costa Rica estuvo menos sujeta al conflicto y a la guerra civil que Uruguay, pero fue más lenta que Chile para lograr la estabilidad política. La base económica inicial de Costa Rica, al igual que la de los otros dos países, era las exportaciones agrícolas. Costa Rica fue uno de los primeros países latinoamericanos en comprometerse con la exportación del café y ya para 1850, ese producto se había convertido en la llave para transformar la que anteriormente había sido la economía más débil de América Central en la más fuerte. Después de 1850, el café permitió que una clase gobernante definida con bastante claridad (Stone, 1975), aunque débil, consolidara su poder, así como también que se estabilizara el Estado mucho antes que en los otros países centroamericanos (Gudmundson y Lindo-Fuentes, 1995, Cap. 1).¹⁰

A diferencia de Chile y Uruguay, Costa Rica tardó en desarrollar partidos políticos estables y claramente definidos, incluso en el sentido mínimo de facciones de la élite relativamente estables como los liberales y conservadores que llegaron a dominar la política en otros puntos de América Central. La gran fisura entre liberales y conservadores afectó a Costa Rica, pero prevalecieron los liberales en la década de 1880 sin que

llegaran a necesitar la institucionalización de un partido estable. La Iglesia, eje del pensamiento conservador en el siglo pasado, era relativamente débil en Costa Rica,¹¹ y nunca se formó un partido conservador consciente de sí mismo. Costa Rica fue más bien testigo de una serie de hegemonías personales (Peeler, 1985, Cap. 2) que se extendieron casi hasta mediados del siglo XX. Dentro de una economía política básicamente dominada por una clase capitalista agroexportadora, el proceso político consistió en una serie de conflictos entre facciones personalistas claramente identificables dentro de esa clase. Estas facciones luchaban por controlar el Estado en un ciclo definido que se repitió varias veces desde la Independencia hasta 1948. En general, el uso de la fuerza tendía a disminuir, mientras que el regateo con la élite y el clientelismo cobraron relativa importancia en el siglo XX.

Estas hegemonías se mantenían principalmente mediante los lazos personalistas de la familia y la clientela. En las áreas rurales, se utilizó el poder económico de los caficultores y exportadores de café más importantes para controlar a la mayoría de la población, los dueños de fincas pequeñas, los arrendatarios y los peones. Además, en el siglo XIX la población urbana era de poca importancia.

La dictadura de Tomás Guardia (1870-1882) marca un hito difícil para Costa Rica, tanto política como económicamente. Al iniciar el primer ferrocarril del país, y por ende al sentar las bases para el sector bananero exportador, Guardia plantó la semilla que habría de diluir la primacía económica de los grandes caficultores y exportadores de café, y que establecería lazos más directos entre Costa Rica y el mundo de las inversiones internacionales. A la vez, el mismo éxito del café llevó a una marcada diversificación de la sociedad costarricense, incluyendo la élite. Quienes heredaron el poder de Guardia eran muy diferentes en muchos sentidos a los caficultores y exportadores de café que anteriormente habían controlado el gobierno. La riqueza proveniente del café había promovido la urbanización, había mejorado las comunicaciones y la educación en todos los niveles. Como lo ha demostrado Stone (1975), la clase gobernante estaba pasando por un proceso de diferenciación, en el que algunos se alejaban de la industria cafetalera para establecerse como profesionales de carrera. El liderazgo político, después de 1882, surgió cada vez con más frecuencia de este último sector.

Los cambios promovidos por el liberalismo positivista de las décadas de 1870 y 1880 acentuaron las tendencias ya existentes en el liberalismo difuso que sobresalía en Costa Rica desde la consolidación de la independencia: (1) intensificación de las políticas económicas liberales; (2) intensificación de los esfuerzos por limitar la influencia de la Iglesia; (3) mayor énfasis en la educación;¹² (4) incremento en el grado de respetabilidad republicana, o sea mantenimiento del orden constitucional en los procesos políticos. Estos cambios llevaron directamente a la primera movilización política y popular en Costa Rica en 1889, cuando el Presidente Bernardo Soto, liberal, pretendió, según era costumbre, asegurarse la elección de Ascensión Esquivel como su sucesor.¹³ La primera ronda de votaciones por parte de un electorado restringido demostró un fuerte apoyo al candidato opositor, pero quienes apoyaban al partido en el poder parecían estar preparados para retenerlo por la fuerza. En respuesta, el estratega de la oposición, Rafael Yglesias, movilizó el apoyo popular que obligó al reconocimiento del ganador de las elecciones.

Los costarricenses con frecuencia citan este episodio como el inicio de la democracia costarricense. Esto en realidad es exagerar un poco el asunto. Es cierto que la primera movilización popular frustró un intento por imponer la continuación de la

hegemonía. También es cierto que los bandos opuestos estaban mejor organizados como partidos y tenían mayor sustento ideológico de lo que se había vivido hasta ese momento. Por otra parte, el electorado todavía era una pequeña fracción de la población y la elección era indirecta. La crisis de 1889 fue un triunfo del principio de que la oposición podía ganar el poder por medio de las elecciones, pero Costa Rica en realidad todavía no era una democracia. Una señal de esto es el hecho de que la historia política del país siguió estando marcada por una sucesión de hegemonías, la primera de las cuales fue la de Rafael Yglesias (1890-1902). Es decir el presidente saliente a menudo podía definir su sucesor, incluso después de 1889. Inclusive cuando la crisis económica mundial de 1900-1903 hizo que Yglesias se volviera políticamente vulnerable en 1901, en vez de aceptar la derrota política o el golpe militar, negoció con los que se oponían a su Partido Republicano, logrando el acuerdo en torno a un sucesor mutuamente aceptable (precisamente su antiguo adversario en 1889, Ascensión Esquivel).

Durante las siguientes tres décadas, los republicanos y su principal líder, Ricardo Jiménez, ganarían un dominio cada vez mayor, a pesar de que ni Jiménez ni su partido ejercieron nunca el nivel de control político ejercido por Yglesias. De hecho, Yglesias continuó jugando un papel político importante después de 1902 y se postuló para presidente varias veces. Pero Jiménez fue sin duda el político más importante de Costa Rica entre principios de su primer mandado en 1910 y el final de su tercera administración en 1936. Durante esta era, la política poco a poco se hizo menos elitista mediante la puesta en práctica del voto directo, el aumento del nivel de alfabetización y la aparición de los gamonales locales, o líderes políticos que usualmente no provenían de la élite económica y social del país (Stone, 1975: 223-226).

Los límites de esta república liberal y elitista los marcó el destino de varios cambios políticos en el grupo hegemónico. El primer reto lo presentó el Presidente Alfredo González Flores (1914-1917), quien se enfrentó a la drástica disminución del comercio causada por la Primera Guerra Mundial. Trató de manejar la crisis fiscal causada por la pérdida de ingresos en el renglón de impuestos a las importaciones y a las exportaciones. Para ello propuso un conjunto de impuestos al capital y a la renta.¹⁴ La mayoría de los miembros de la élite política (con la notable excepción de Ricardo Jiménez) respondió a este ataque a la propiedad apoyando el golpe militar que dio el Secretario del Interior, Federico Tinoco.

La dictadura de Tinoco (1917-1919) fue de orientación conservadora y contaba con un fuerte apoyo entre los grandes caficultores y exportadores de café (sector que contaba con lazos económicos muy estrechos con Alemania, principal mercado para el café de exportación). El régimen fue derrocado por una combinación de protestas populares, conspiración de la élite y presión del gobierno de los Estados Unidos. Jiménez y sus partidarios estaban en una excelente posición para volver a ganar el dominio que antes tenían, ya que la mayoría de los rivales habían apoyado la dictadura.

De hecho, Jiménez fue electo presidente por segunda vez en 1924, en la primera elección que incluyó la competencia por el voto popular, en el sentido moderno. En esta elección también se dio un amplio espectro ideológico, ya que los republicanos liberales de Jiménez tuvieron como opositores al Partido Agrícola, conservador y al Partido Reformista, decididamente de orientación social cristiana. El Partido Reformista, liderado por un exsacerdote, Jorge Volio, fue el primer partido que atrajo explícitamente a la clase trabajadora. La elección popular del 4 de diciembre de 1923 dio el siguiente resultado (Oconitrillo, 1982; 80):

Ricardo Jiménez (Republicano)	29.238	42.3%
Alberto Echandi (Agrícola)	25.758	37.3
Jorge Volio (Reformista)	14.063	20.4
TOTAL ¹⁵	69.059.990	

Al no haber mayoría absoluta, la decisión recayó en el Congreso, la mitad del cual había sido electo en esa ocasión, mientras que la otra mitad había sido electa dos años antes. El Partido Reformista tenía el balance del poder y en última instancia logró un acuerdo con Jiménez que permitió la elección de este último. El acuerdo, sin embargo, también le permitió a Jiménez suavizar el reto reformista y apoyar algunos elementos del programa reformista. El Partido Reformista no volvería a ser nunca más un actor importante en el escenario político costarricense.

Durante los siguientes doce años la Presidencia se alternó entre Jiménez y Cleto González Víquez,¹⁶ en lo que sería la última ronda de los dos viejos caudillos. Aunque por lo general eran adversarios políticos, compartían el liberalismo amplio que caracterizaba la época y el uno siempre se refirió al otro con respeto. El dominio político que ejercían en la República Liberal era indiscutible; por otra parte, Jiménez por lo general provocaba una intensa oposición, como fue el caso en las elecciones de 1932, cuando le tocó al Presidente Víquez sofocar la rebelión del principal candidato perdedor, asegurando así la sucesión para Jiménez.

La década de 1930, en Costa Rica al igual que en todas partes, fue una época de crisis económica y política. Ya los signos de cambio político eran evidentes desde 1932, con la organización del Partido Comunista y su liderazgo en una importante huelga de los trabajadores bananeros, iniciativa que le procuró la lealtad permanente de ese sector de la clase trabajadora. Pero la crisis no se agudizó sino hasta después de la toma de posesión del Presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, en 1940. Calderón había sido un político tradicional, que ascendió gracias a los servicios leales prestados a sus predecesores y patronos. Pero una vez en el poder, Calderón demostró ser un líder muy innovador y emergió como el nuevo caudillo republicano.¹⁷

Posteriormente, Calderón tuvo que enfrentar la hostilidad de gran parte de la vieja élite política de la cual había sido parte, especialmente de los sectores más conservadores compuestos principalmente por los grandes cafetaleros. En su búsqueda de una forma de consolidar su poder frente a la oposición de sus antiguos camaradas, Calderón optó por una estrategia populista. Trató de ganarse la lealtad de la clase trabajadora. En este aspecto estuvo fuertemente influido por su amigo cercano, el Arzobispo Víctor Sanabria, así como por la doctrina social católica. A fin de darles a los trabajadores beneficios tangibles que pudieran atraerlos a su causa, estableció una alianza con el Partido Comunista, cuyos miembros y cuadros de trabajo estaban muy organizados y constituían un cuadro político ya listo.¹⁸ Utilizando la mayoría republicana en la Asamblea, impulsó varias leyes innovadoras, entre las que sobresale un avanzado sistema de seguridad social y un nuevo Código de Trabajo muy favorables para los sindicatos. En un estilo clientelista clásico, luego trató de utilizar los nuevos programas de gobierno y sus beneficios para cimentar el apoyo político a su figura.

Su clara intención de consolidarse y perpetuarse como jefe político, así como su alianza con los comunistas, hizo que sus opositores conservadores (agrupados en el Partido Demócrata y liderados por el antecesor de Calderón, León Cortés Castro) se tornaran más agresivos y desesperados. La oposición también surgió de otro frente: la izquierda

moderada. El Partido Socialdemócrata surgió de una alianza entre los intelectuales socialistas y una rama izquierdista del Partido Democrático liderada por José Figueres. Los socialdemócratas objetaban el abuso político de las reformas de Calderón, si bien las apoyaban en principio. En términos más amplios, condenaban la creciente corrupción abierta del régimen calderonista. Finalmente, rechazaban la alianza de Calderón con los comunistas, con quienes los socialdemócratas competían por el control de los sindicatos.

Las elecciones de 1944, teñidas por serias acusaciones de fraude por parte del gobierno de Calderón, las ganó un calderonista leal, Teodoro Picado. Después de las elecciones de medio período en 1946, la oposición tuvo éxito al exigir un control real por parte del tribunal electoral, como condición para participar en las elecciones presidenciales de 1948. Calderón intentaba volver a la presidencia, contra una oposición unida en torno a la candidatura del periodista conservador Otilio Ulate. Cuando los resultados electorales indicaron que Ulate había ganado, la mayoría calderonista en la Asamblea votó a favor de anular las elecciones con el pretexto del fraude. Figueres, mientras tanto, había estado conformando un ejército en su finca al sur de Costa Rica; marchó hacia San José exigiendo la renuncia del gobierno y el reconocimiento de Ulate como presidente constitucional. Después de una corta y sangrienta guerra, Calderón, Picado y los líderes comunistas negociaron la rendición y se les permitió salir del país. José Figueres y el ejército de Liberación Nacional eran dueños del escenario.

Se puede ver que las negociaciones que llevaron al establecimiento de la democracia liberal se iniciaron en la crisis de 1948.¹⁹ Conforme quedaba claro que Figueres tenía la posibilidad de ganar la guerra civil, varios grupos de interés presionaron para que se llegara a un acuerdo. Los calderonistas querían evitar la destrucción de sus reformas y de su posición política. Los comunistas querían mantener el estatus legal y su participación en la fuerza laboral organizada. Los aliados conservadores de Figueres, procedentes del sector empresarial y que apoyaban a Ulate, querían que éste fuera declarado Presidente sin tener que depender de las bayonetas de Figueres. Los socialdemócratas querían tener el camino abierto para la creación del nuevo orden democrático que proponían en su programa. El mismo Figueres, además de tener estas preocupaciones de índole programática, parecía firme con respecto a lograr una victoria militar total que lo dejara en libertad para actuar.

La Iglesia y la Embajada de los Estados Unidos trabajaron activamente para promover un acuerdo. La posición del Arzobispo Sanabria era básicamente que había que encontrar la forma de detener el derramamiento de sangre. La posición de los Estados Unidos era más compleja y profundamente ambivalente (ver Schifter, 1986). A los Estados Unidos les preocupaba cada vez más la presencia de los comunistas en los gobiernos de Picado y Calderón pero, por otra parte, Calderón había sido un aliado muy confiable durante la Segunda Guerra Mundial y, además, era amigo cercano del Presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, otro fiel aliado de los Estados Unidos. Sin embargo, Somoza estaba temporalmente en conflicto con los Estados Unidos en torno al sucesor de la presidencia en Nicaragua. Los Estados Unidos también desconfiaban de la alianza de Figueres con el Presidente Juan José Arévalo, de Guatemala, un reformador a quien veían con recelo los círculos gubernamentales de los Estados Unidos (compárese Schifter con Schelesinger y Kinzer, 1986, en relación a este período). El fuerte anticomunismo de Figueres lo recomendaba, pero su lucha a favor de reformas amplias causaba cierto desasosiego y, además, no era bien conocido en los políticos estadounidenses. Los Estados Unidos, por ende, manejaba señales muy ambiguas; de hecho, el Departamento de

Estado y el Embajador no siempre estaban de acuerdo con respecto a una situación que no se consideraba clave para los intereses de los Estados Unidos. Por lo tanto, no debe sorprendernos que conforme aumentó la crisis a finales de los años 40, los Estados Unidos no se manifestaron en forma enfática a favor de ninguna de las partes. Finalmente, con la llegada de la guerra civil y la reducción de las alternativas a Calderón (y los comunistas) o Figueres, la política de los Estados Unidos se inclinó a favor de la salida negociada de Calderón. El Embajador de los Estados Unidos, junto con el Nuncio Apostólico, fue una persona clave para lograr un acuerdo en los últimos días de la guerra, impidiendo así el ataque a la propia ciudad de San José.

El 1 de mayo de 1948, una semana después de haber entrado a la ciudad con su ejército, Figueres firmó un pacto con Otilio Ulate, en el cual se establecía que éste asumiría el poder en un plazo de dieciocho meses, durante el cual el país sería gobernado por una junta provisional. La Junta sería responsable de llamar a elecciones para constituir una Asamblea Constituyente que redactaría una nueva constitución, y tendría autoridad para gobernar durante la transición. Figueres, como Presidente de la Junta, recibió así amplios poderes provisionales que usó, por ejemplo, para abolir el ejército, nacionalizar la banca y darle al Estado autoridad para conducir la economía. Estas y otras medidas tenían como fin establecer las bases para el programa socialdemócrata orientado a reestructurar la sociedad. Este plan se frustró cuando por falta de organización popular, los socialdemócratas perdieron las elecciones para la Asamblea Constituyente, que le dio una sólida mayoría al Unión Nacional, partido conservador de Ulate. El borrador de la innovadora constitución que propuso la Junta fue rechazado a favor de las enmiendas al documento existente, incluyendo el otorgamiento del voto a las mujeres. Estos cambios ratificaban la mayoría de los cambios decretados por la Junta, pero de todas formas los socialdemócratas no lograron la transformación total de Costa Rica.

El pacto con Ulate no era estrictamente necesario, ya que Figueres y el Ejército de Liberación Nacional tenían el monopolio de las fuerzas militares; más aún, los Estados Unidos no se inclinaban por la intervención. El intento de Calderón de invadir desde Nicaragua tan sólo aumentó el apoyo a Figueres. En fin, éste pudo haber hecho cualquier cosa, incluyendo la imposición de una dictadura personal. El hecho de que haya iniciado y respetado el pacto parece reflejar un compromiso de parte de Figueres con los principios de la democracia basada en los procedimientos, independiente de su compromiso con el programa básico de los socialdemócratas.

El pacto Figueres-Ulate de 1948 fue un acuerdo que sirvió para regular la competencia, dentro del marco liberal democrático, entre los dos sectores mayoritarios de la oposición victoriosa. De 1948 a mediados de la década de los 50, Calderón y sus seguidores estuvieron fuera del proceso político, si bien trataron dos veces de derrocar el gobierno mediante invasiones desde Nicaragua. No fue sino hasta las elecciones de 1958 que Calderón logró reintegrarse al proceso político, al aceptar el marco institucional y el sistema partidista que ya se había establecido. Calderón se unió a la débil coalición conservadora que se desarrolló para oponerse al Partido Liberación Nacional (que había sido fundado por Figueres después de que la Junta dejó el poder en 1949 y que llevó a Figueres a la victoria en las elecciones de 1953). Ya para 1958, las transformaciones iniciadas en 1948 se habían ampliado hasta incluir al principal perdedor de la guerra civil. Incluso entonces, no existía ningún acuerdo explícito ni pacto que definiera los términos de la reintegración de Calderón. La naturaleza de los compromisos asumidos durante el período de 1948-49 facilitó la incorporación posterior de Calderón, en el sentido de que

sus innovaciones institucionales claves (en especial el Seguro Social), se mantuvieron intactas, si bien desprovistas del personal calderonista. Calderón logró siempre obtener crédito político entre los posibles votantes gracias al establecimiento del Seguro Social. Las decisiones de 1948-49 sentaron, por lo tanto, las bases para la competencia política civil al satisfacer, aunque en forma mínima, no solo a los vencedores sino también a Calderón, el perdedor más importante. En contraste, a los comunistas y otros partidos de izquierda, proscritos por la Constitución de 1949, no se les permitió la participación electoral irrestricta sino hasta 1970.²⁰ La prohibición constitucional de los partidos comunistas se levantó oficialmente en 1975. (Ver Oconitrillo, 1982; Salom, 1987).

El régimen democrático liberal en Costa Rica a partir de 1949 ha demostrado un alto nivel de estabilidad basada en la interacción de un sistema político fuertemente presidencialista con una representación proporcional en las elecciones para la Asamblea Legislativa.²¹ Si bien el régimen se basa en las cláusulas del pacto Figueres-Ulate, la competencia irrestricta, pero civilista, entre el PLN y sus opositores ha sido la regla a seguir. La coparticipación de la oposición en el gobierno no ha sido característica. El control de la presidencia ha tendido a alternarse entre el PLN de centro-izquierda y una coalición antagónica al PLN, cada vez más consolidada y de centro derecha, llamada ahora el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). De 1949 a la fecha, cinco partidos han sido del sector opositor al PLN. El PLN normalmente ha logrado al menos mayoría simple en la Asamblea Legislativa, pero el PUSC logró mayoría absoluta con el Presidente Rafael Ángel Calderón Fournier (1990-94). Los partidos de izquierda no han sobrepasado el 5% de los votos desde 1949.

Desde 1949, las élites costarricenses dominantes generalmente se muestran comprensibles en cuanto a la forma de maximizar su ámbito de acción autónoma en relación con los Estados Unidos.²² La política exterior costarricense es consistentemente favorable a los Estados Unidos, independientemente del partido en el poder, y todos los gobiernos costarricenses desde 1948 han sido anticomunistas. El compromiso costarricense con la democracia es un rasgo sobresaliente de la autoimagen del país, y se expresa en términos liberales que son aceptables para la contraparte estadounidense. El estado costarricense, que es relativamente fuerte, por lo general ha sido administrado con un grado razonable de eficiencia, y la economía se ha manejado de modo que se logren evitar los problemas más graves, como la hiperinflación. Como resultado, los Estados Unidos por lo general han visto en Costa Rica un país amigo pero que no requiere un amplio control. El país regularmente ha tenido acceso a montos modestos de préstamos internacionales y de ayuda de los Estados Unidos y no ha sido necesario sacarlo a flote por razones de emergencia. Esta tradición general de competencia prudente les ha suministrado a las élites costarricenses un ámbito de acción suficiente como para mantener también un fuerte estado benefactor, así como el control estatal de la banca y los seguros, a pesar de que estos rasgos están de alguna forma en conflicto con la sabiduría convencional de los Estados Unidos.

Las dos crisis de la década de 1980 (la crisis de la deuda del Tercer Mundo y las revoluciones centroamericanas) fueron de naturaleza diferente pero de igual intensidad a las crisis que destruyeron las democracias de Chile y Uruguay en la década anterior. El hecho de que la democracia costarricense sobreviviera es digno de mención en este análisis comparativo.

La escalada de la confrontación de los Estados Unidos con los sandinistas hizo que Washington le prestara más atención a la región y que considerara que Costa Rica,

como país al sur de Nicaragua, era estratégicamente importante. El resultado fue que Costa Rica obtuvo más ayuda de la que de otro modo hubiera recibido, con lo cual logró paliar los efectos de la crisis causada por la deuda. Por otra parte, las élites gobernantes se vieron mucho más presionadas que de costumbre por los Estados Unidos en relación a varios temas. En lo relativo a temas estratégicos, la Administración Reagan prácticamente exigió que Costa Rica tolerara el establecimiento en su territorio de bases de los contras y que además facilitara la lucha contrarrevolucionaria de varias otras formas. Aún más problemático para el carácter fundamental de la democracia costarricense, Washington presionó a Costa Rica para que ampliara y militarizara la Guardia Civil y la Guardia Rural (fuerzas levemente armadas que Costa Rica mantiene en vez de un ejército). El gobierno de Luis Alberto Monge (PLN, 1982-86) demostró ser proclive a estas presiones, en tanto que el sucesor de Monge, Oscar Arias (PLN, 1986-90) se resistió con más fuerza. El gobierno de Arias se resistió contra la presión estratégica de los Estados Unidos en dos frentes, el interno y el externo. En lo interno, fueron denunciados los oscuros operativos que habían sido el resultado de las concesiones de Monge y fueron tratados como una situación de conflicto con la Constitución costarricense o con su política exterior neutral y pacífica. En la mayoría de los casos los operativos fueron clausurados. Este fue el destino, por ejemplo, de las bases de los contras y del campo de aterrizaje en tierras del colaborador de la CIA estadounidense, John Hull. En lo externo, la principal estrategia de Arias se centró en un acuerdo de paz autónomo para Centroamérica, el cual fue finalmente logrado en 1987, después de que los Estados Unidos fueron diplomáticamente excluidos (Rojas y Solís, 1988). La diplomacia del Plan de Paz de Arias es un excelente estudio de cómo los estados pequeños pueden ejercer una autonomía considerable en relación a las grandes potencias.²³

La aparición de la crisis en el Tercer Mundo a causa de la deuda externa, a principios de los 80,²⁴ aumentó la dependencia de la ayuda exterior que tenía Costa Rica, así como su vulnerabilidad ante la presión estadounidense, conforme el país, como muchos otros, se vio imposibilitado para cumplir con los pagos. La principal fuente de crédito en tales emergencias es, por supuesto, el Fondo Monetario Internacional que, como siempre, insistía en acciones para aumentar los ingresos del gobierno, reducir el gasto y reducir las barreras comerciales. Además, bajo la influencia de la Administración Reagan, en la década de los 80 el Fondo ha presionado en forma específica a favor de la privatización de las empresas estatales y de la reducción de la regulación estatal de la economía. La Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (AID), también administró directamente un fondo considerable, debido a la importancia estratégica de Costa Rica, e insistió básicamente en las mismas condiciones. Las implicaciones para el estado benefactor y para la economía dirigida por el Estado costarricense eran muy serias. Hubo una fuerte presión para privatizar la banca y los seguros, abrir el sistema médico aún más al sector privado y reducir los presupuestos en salud, seguridad social y educación. Los dos gobiernos del PLN durante los 80 postergaron estos cambios todo lo que les fue posible, permitiendo sólo lo estrictamente necesario para asegurarse la obtención de fondos del FMI y la AID. El gobierno conservador de Rafael Calderón Fournier (Partido Unidad Social Cristiana, PUSC, 1990-94) se mostró mucho más entusiasta en relación a estos cambios, pero aún así actuó cautelosamente, en virtud de la popularidad y de la necesidad de los servicios que estaban amenazados. El actual gobierno liberacionista de José María Figueres de nuevo aceptó una reducción sustancial de los servicios sociales, así como una contracción significativa del papel del gobierno en la economía, debido a que

el estado simplemente no contaba con los recursos necesarios y no podía pedir préstamos suficientes para mantener los servicios. No obstante, es sorprendente el hecho de que el estado social y democrático aún exista en forma reconocible, a pesar de una década de presión neoliberal. En política económica, así como en política estratégica, las élites de Costa Rica han tenido un gran éxito con la estrategia de doblarse ante la presión con el fin de no quebrarse.

DESARROLLO DEMOCRATICO INICIAL EN AMERICA LATINA: TRES CASOS

No obstante los numerosos y obvios contrastes que presentan estos tres pioneros de la democracia estable en América Latina, comparten algunas similitudes básicas. En primer lugar, queda claro que todos evolucionaron hacia la democracia liberal en el sentido convencional de contar con sufragio universal, elecciones libres y participativas y respeto por las libertades civiles. Todos se convirtieron en democracias en tanto mantenían una presidencia fuerte, siguiendo el patrón de la constitución de los Estados Unidos, lo cual ha sido característico de América Latina desde la independencia. También queda claro que a ninguna la caracterizó algo semejante a la verdadera soberanía popular, excepto en el sentido más básico de contar con elecciones periódicas. En cuanto a estos rasgos, no eran ni más ni menos democráticas que otras democracias liberales del siglo veinte, especialmente las del área del Atlántico norte.²⁵

En cada caso, la democracia evolucionó directamente a partir de la herencia política predemocrática del siglo XIX y, naturalmente, tenía sus raíces en la propia estructura social y económica. No debe sorprendernos, entonces, que las tres hayan desarrollado una organización y un discurso institucional propios.

La democracia uruguaya se desarrolló como continuación y adaptación directa del bipartidismo tradicional de colorados y blancos. Lideradas y retadas por Batlle, las élites de colorados y blancos aprendieron a movilizar, apaciguar y guiar la masa electoral, en tanto instituían un sistema electoral que estimulaba a los desidentes para que se mantuvieran en los partidos tradicionales y además dificultaba la emergencia exitosa de otros partidos. Los líderes políticos llegaron a ver el notable estado benefactor, implantado por Batlle y apoyado por sus sucesores, como un pago masivo al electorado, en tanto que éste consideraba, cada vez con más frecuencia, que los beneficios constituían un derecho. Ambas actitudes están arraigadas en el clientelismo predemocrático. La práctica de la coparticipación, tan típica de la democracia uruguaya, tiene también un amplio precedente en el siglo XIX, como un medio para poner fin a los conflictos civiles.²⁶

Scully (1992) ha demostrado que el característico sistema partidista tripartito, tan propio del Chile democrático anterior a 1973, encuentra sus raíces a mediados del siglo XIX (SA Remmer, 1984). La dinámica básica de una derecha y una izquierda que giran en torno a un partido de centro moderador se estableció ya desde la década de 1860, continuó a lo largo de la era en que dominaban los radicales (1932-1960) y en los días de gloria de la Democracia Cristiana en la década de 1960. El patrón quizás esté en vías de reafirmarse en la era posterior a Pinochet (ver Oppenheim, 1993).

Costa Rica también le debe el carácter único de su sistema partidista al hecho de que hayan sobrevivido patrones que se remontan al siglo XIX, mucho antes del establecimiento de la democracia. Ya se ha resaltado el patrón de hegemonías personales que se daba en el siglo XIX, así como la forma en que se amplió y se adaptó cuando las

elecciones populares se hicieron directas y con una mayor base electoral. Calderón Guardia fue el último en detentar ese tipo de hegemonía personal (1940-48). Sin embargo, a partir de 1949 el régimen democrático en sí ha funcionado como un tipo de hegemonía conjunta y despersonalizada de los partidos de centro, en el sentido de que el sistema electoral está estructurado de modo tal que prácticamente le asegura la victoria al PLN o a su principal oponente de centro-derecha.²⁷

Otro rasgo predemocrático que Costa Rica ha mantenido y ha adaptado a la democracia es la polaridad misma de sus sistema partidista. Como ya anotamos, la división entre liberales y conservadores fue menos importante en Costa Rica que en el resto de América Central (y ciertamente menos importante que en Chile y Uruguay). Sin embargo, tuvo el peso suficiente para establecer un patrón bipolar. Ya desde la década de 1880, y claramente establecido en la época de Ricardo Jiménez (1910-36), vemos un patrón que presenta un partido dominante con un grado considerable de estabilidad organizacional, al cual se le opone en elecciones sucesivas un agregado inestable de partidos y grupos a quienes los une tan sólo la oposición al partido dominante. Durante las décadas de 1920 y 1930, Jiménez y su Partido Republicano tuvieron ese tipo de oposición mal organizada. Cuando los oponentes lograban unirse en torno a un solo candidato, era posible vencer a los Republicanos, pero la división de la oposición aseguraba la victoria de los republicanos. Este es el mismo patrón que ha prevalecido en la Costa Rica democrática, en donde el PLN ha asumido el papel de partido dominante, en tanto sus oponentes lucharon de 1949 hasta aproximadamente 1980 para formar un partido estable, el PUSC (Ver Oconitrillo, 1982).

En cada uno de los casos, la democracia liberal surgió a partir de una oligarquía civil en la que las élites políticas desarrollaron costumbres para la confrontación política, algo así como una sintaxis política. Esto concuerda con la tesis de Dahl (1971, 1989) de que es más probable que la democracia sea estable si antes de la inclusión se establece el método para la confrontación.

Estos tres regímenes se hicieron democráticos a principios del siglo XX, conforme demostraban su capacidad para absorber y coparticipar con una importante ampliación del sufragio, sin alterar por ello el balance del poder político, lo cual podría provocar la oposición de los grandes intereses. Esta ampliación de la base electoral tuvo lugar después de una prolongada crisis, por cuanto los sectores conservadores se resistían ante los intentos democratizantes de ampliar la participación. Solo mediante la resolución de estas crisis fue posible estabilizar la democracia liberal en forma definitiva, conforme surgían partidos y líderes capaces de manejar la transición.²⁸

En Chile, la crisis comenzó con la elección de Arturo Alessandri en 1920, y finalizó cuando regresó a la presidencia en 1932, cuando ya estaba firme el nuevo orden constitucional y político.²⁹ El interludio autoritario de Terra en Uruguay (1933-42) fue un intento conservador de imponer orden después de las reformas de Batlle, mediante el reestablecimiento de una presidencia fuerte. Finalmente, la crisis de 1940-49 en Costa Rica fue provocada directamente por el intento populista de Calderón de incorporar a la clase trabajadora.³⁰

En la siguiente tabla se presentan los totales de votos emitidos antes y después de las crisis respectivas, indicados como porcentaje de la población nacional. El rasgo más obvio de los datos es la tasa de participación mucho menor para Chile hasta que las mujeres votaron para presidente por primera vez en 1952. En contraste, la llegada del voto femenino a Costa Rica (1953) y Uruguay (1934) se asocia con un aumento mucho menor.

Tabla 1

Votación total como porcentaje de la población

País	Año	Total de votos	Población estimada	%
Chile	1921	197.000	3,785.000 (1920)	5,2
	1925	260.895	4,075.000 (1925)	6,4
	1932	343.892	4,504.600 (1932)	7,6
	1938	443.898	4,923.400 (1938)	9,0
	1952	955.102	6,561.600 (1952)	14,6
Costa Rica	1923	69.059	418.000 (1923)	16,5
	1940	107.866	670.164 (1940)	16,1
	1953	190.768	976.736 (1953)	19,5
Uruguay	1930	318.676	1,758.800 (1930)	18,1
	1946	518.000	2,135.013 (1946)	24,3

Fuentes: Acevedo (1936), págs. 271-271; Ameringer (1982), pág. 7; Loveman (1988), págs. 233, 236; Migone (1940), pág. 51; Oconitrillo (1982), págs. 80, 131, 165; Pende (1952), págs. 91-92; Remmer (1984), pág. 84; Weinstein (1988), pág. 4.

Los tres sistemas se mantuvieron políticamente estables durante tanto tiempo porque cada uno estaba estructurado para mantener la estabilidad social y económica. Las estructuras reguladoras variaban según los antecedentes históricos de cada caso, pero todas protegían la distribución básica de los recursos bajo la cual había surgido el régimen. Es decir, cada una tenía un sesgo hacia una política de centro, una proclividad a evitar las posiciones radicales. Un componente esencial del sesgo centrista era la capacidad de cooptar con la izquierda o marginalizarla. En los tres casos esto era parte de la política usual (tardíamente en Costa Rica), pero en ningún caso podía la izquierda desarrollar su agenda política sin poner en peligro la estabilidad del régimen democrático.

La derecha, que representaba los intereses establecidos con base en la propiedad, era en todos los casos más fuerte que la izquierda, pero el logro mismo de un sistema político que institucionalizaba las elecciones libres y participativas, el sufragio universal y el respeto por las libertades civiles, tendía a socavar la base clientelista del poder de la derecha, que en los tres casos recibió mucha oposición. Por lo tanto, en los tres casos la derecha se mantenía como un vocero político fuerte, aunque había perdido la capacidad para gobernar sola. La única forma de que la derecha volviera a tener el dominio anterior era poniéndole fin al régimen democrático mismo.

El sesgo centrista representaba un compromiso explícito (en Uruguay y Costa Rica) o implícito (en Chile) a nivel de las élites políticas en competencia, el cual reflejaba un balance, o status quo, en la sociedad como un todo. Dichos compromisos funcionaban para reducir a niveles tolerables la incertidumbre inherente en la democracia. Przeworski (1991, págs. 36-37) indica que las democracias duraderas han desarrollado

instituciones “que reducen los riesgos de las luchas políticas”, produciendo gobiernos “lo suficientemente fuertes para gobernar eficazmente pero lo suficientemente débiles para que no puedan gobernar contra los grandes intereses”. En cada uno de estos tres casos, los principales protagonistas de las élites y sus seguidores tenían la seguridad de algún grado de éxito electoral y de capacidad para impedir el ataque a sus intereses fundamentales. De la misma manera, ninguno podía aspirar a imponer su voluntad sin negociar algún tipo de acuerdo.

La importancia del equilibrio y la negociación en estos tres casos se veía reforzada por la relativa debilidad de las disputas ideológicas, a diferencia de los conflictos de intereses y la competencia por el poder y los puestos de mando. Incluso en el caso chileno, en el cual existía una clara y amplia gama ideológica, antes del período de Allende, los principales actores de la derecha y de la izquierda se mostraban más preocupados por lograr los puestos de mando y por el estira y encoge del proceso político, que por la consistencia ideológica.

Estas tres democracias iniciales en América Latina eran genuinas democracias liberales y, como tales, profundamente innovadoras en el marco de su contexto histórico y cultural. A la vez, cada una estaba profundamente arraigada en sus propias tradicionales y en el marco cultural e histórico más amplio que hace única a América Latina. Cada uno de los tres regímenes fue un paso decisivo hacia adelante para su pueblo, aunque cada uno de ellos se constituyó para privilegiar el orden frente a la justicia. Si hubiera sido de otro modo, no habrían durado tanto tiempo.

Traducción de M.L. Giannina Umaña

Notas

1. Las principales fuentes para la historia política y la economía política chilena incluyen Bethell (1993); Loveman (1988); Remmer (1984); Petras (1969); Gil (1966); Kinsbruner (1973); Scully (1992); Zeitlin (1984); Zeitlin y Ratcliff (1988); Osorio (1990); Ramírez Necochea (1985); Nunn (1976); Valenzuela (1978, 1989); Oppenheim (1993); Nef y Galleuillos (1995).
2. Collier y Collier (1991), en su extenso estudio comparativo sostienen que Chile manejó el problema de la incorporación de los trabajadores al sistema político despolitizando y controlando el movimiento obrero, mientras que en Uruguay ese movimiento fue movilizadizo por uno de los partidos tradicionales en el poder, los colorados.
3. Ver Senado de los Estados Unidos (1975).
4. La bibliografía sobre la política chilena de finales de los 60 y principios de los 70 es muy amplia. Ver en especial Valenzuela (1978) y Oppenheim (1993).
5. Las principales fuentes para la historia política y la economía política de Uruguay incluyen Weinstein (1988, 1995); Gillespie (1991); Gillespie y González (1989); González (1991); Kaufman (1979); Vanger (1980); Finch (1981); Rottenberg, comp. (1993); Panizza (1990).
6. Vanger (1980) contiene una descripción muy detallada de la era de Batlle.

7. El sistema electoral uruguayo a menudo se cita como único en su género; se le ha dado poca atención al hecho de que Honduras adoptara básicamente el mismo sistema para las elecciones de 1986, con resultados parecidos: el Presidente electo no recibió la mayoría de los votos, pero era el candidato que lideraba el partido a la cabeza en la votación. Ver Rosenberg (1989).
8. Ver Guillén (1975); Porzecanski (1973).
9. En contraste, el 36% que obtuvo Allende en 1970 estaba dentro del ámbito normal para la izquierda chilena.
10. Las principales fuentes de historia política y economía política costarricense incluyen Stone (1975); Cerdas Cruz (1985); Vega Carballo (1982); Muñoz Guillén (1990); Rovira Mas (1988); Oconitrillo (1982); Gudmundson y Lindo-Fuentes (1995); Ameringer (1982).
11. No se creó ninguna diócesis sino hasta 1850, y a partir de entonces las relaciones entre la iglesia y el estado fueron siempre difíciles, culminando con la expulsión del Obispo Bernardo Thiel y de la orden jesuíta en 1884. Ver Backer (1975).
12. Stone (1975, págs. 215-221) demuestra que la tasa de alfabetización en Costa Rica en la década de 1860 era de aproximadamente del 10%, mientras que para la década de 1960 se acercaba al 90%.
13. Ver Oconitrillo (1982), págs. 11-18.
14. Si bien González Flores fue el primer presidente en la era de elecciones populares directas, de hecho no tenía apoyo popular pues fue llevado al poder por el Congreso, gracias a un arreglo político debido a que ninguno de los candidatos postulantes logró la mayoría del voto popular y no fue posible que llegaran a un acuerdo en el Congreso. Ver Oconitrillo (1982), págs. 59-65.
15. La población de Costa Rica en 1925 era 458.500. Por lo tanto, aproximadamente el 15% de la población votó en 1923. Ameringer (1982:7).
16. Jiménez, 1924-1928; González Víquez, 1928-1932; Jiménez, 1932-38.
17. Este párrafo y los siguientes son adaptación de Peeler (1992), pp. 92-94, 98-101.
18. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, era común que los gobiernos latinoamericanos se aliaran con los partidos comunistas, lo cual era aceptado por los Estados Unidos porque la Unión Soviética fue un aliado después de 1941. Las coaliciones de centroizquierda en Chile en los años 40 se dieron en circunstancias internacionales similares. Al finalizar la guerra, y con el advenimiento de la Guerra Fría, estos lazos causaron una fricción cada vez mayor con los Estados Unidos. Para un estudio cuidadoso de la política de los Estados Unidos hacia Costa Rica durante el período 1940-48, ver Schifter (1986).
19. Ver Aguilar Bulgarelli (1980); Oconitrillo (1982); Rovira Mas (1988).
20. Nótese que Costa Rica nunca enfrentó un levantamiento izquierdista. La proscripción de la izquierda fue el resultado de las pasiones e intereses de los vencedores de 1948-49, reforzadas a lo largo de los años por un entorno internacional de Guerra Fría que hizo que

fuera peligroso para cualquier gobierno costarricense ponerle fin a la prohibición. Nótese que, a diferencia de Calderón, la izquierda no fue objeto de ninguna política de recompensa: todo lo que recibió fue el privilegio de participar.

21. Como lo afirmo en otro texto (Peeler, 1985, Cap. 3) una presidencia fuerte tiende a promover los sistemas partidistas bipolares y centristas, en tanto que marginalizan a los partidos de izquierda. A la vez, la representación proporcional les asegura a las élites de izquierda una base institucional y una plataforma para difundir sus ideas. Así, las élites centristas pueden permitir la legalización de la izquierda con la seguridad de que el riesgo de que ganen una elección presidencial es mínimo. Las élites izquierdistas pueden aceptar el orden constitucional democrático con la confianza de que no serán excluidas de los foros públicos. SA Jiménez Castro (1977).
22. A diferencia de Chile y Uruguay, Costa Rica está situada en una región en donde los Estados Unidos tradicionalmente ha promovido una política exterior activa y a menudo intervencionista. La política hacia los Estados Unidos hasta la fecha ha tenido una importancia relativa mayor para los gobiernos de Costa Rica que para los de Chile o Uruguay.
23. Este párrafo y el siguiente son adaptación de la Conclusión en Peeler (1995).
24. Causada fundamentalmente por el repentino aumento en los precios mundiales del petróleo a finales de los 70, los cuales se pagaban mediante el endeudamiento amplio del Tercer Mundo con los bancos comerciales. Ver Stallings y Kaufman (1989). La situación de Costa Rica se vio exacerbada por la inusitada incompetencia del gobierno de Carazo (1979-82).
25. Sin embargo, debe recordarse que Chile estuvo lejos de contar con el sufragio universal hasta 1970, en tanto Costa Rica proscribió la izquierda hasta ese mismo año. Si bien los analfabetos uruguayos obtuvieron el derecho al voto en 1918, esto no ocurrió en Chile sino hasta 1970.
26. Los partidos colombianos sufrieron una evolución similar, aproximadamente veinte años después. Además, hay evidencias de que Calderón Guardia, padre del estado benefactor costarricense, lo consideraba un medio para construir una clientela política entre la clase trabajadora. Ver Peeler (1985), Cap. 2.
27. He sostenido prácticamente el mismo argumento con respecto a Colombia y Venezuela. Ver Peeler (1985), Cap. 3.
28. Argentina presenta un contraste interesante con respecto a esto. La república elitista relativamente estable de principios del siglo XX no pudo sobrevivir a la ampliación del sufragio masculino en 1912 ni a los modestos esfuerzos en pro de la democratización hechos por Yrigoyen después de ser electo en 1916. El régimen constitucional fue derrocado por el Ejército en 1930. Los intentos de Perón de movilizar e incorporar a la clase trabajadora encontraron resistencia y dieron lugar a los golpes de estado militares de 1955, 1966 y 1976. Únicamente con la restauración de la democracia en 1983 es posible decir que definitivamente se ha dado la democratización del electorado. Eso por sí solo, naturalmente, no garantiza la consolidación de la democracia. Consultar Rock (1987); Wynia (1986, 1995).
29. La principal excepción a esta generalización fue el otorgamiento del voto a los analfabetas en Chile, en 1970, lo cual, aunado a los efectos políticos de la reforma agraria en el

sector rural a finales de los 60, fue visto por muchos de la derecha como una amenaza mortal a su viabilidad política. Así, una parte considerable de la crisis de 1970-73 en Chile se debió a que no fue posible lograr esta ampliación final del sufragio sin amenazar los intereses vitales de un importante sector.

- 30 Venezuela y Colombia sufrieron crisis similares durante más o menos la misma época que Costa Rica, pero no lograron consolidar la democracia liberal. Cada una tuvo que soportar otra “experiencia de aprendizaje” autoritaria antes de que los pactos entre las élites establecieran dichos regímenes a finales de la década de 1950. Ver Peeler (1985), Cap. 2.

Bibliografía

- Aguilar Bulgarelli, Oscar. (1980) *Costa Rica y sus hechos políticos de 1948* (San José: EDUCA).
- Ameringer, Charles. (1982) *Democracia en Costa Rica* (New York: Praeger).
- Acevedo, Eduardo. (1936) *Manual de historia uruguaya* (Montevideo: Imprenta Nacional Colorada).
- Backer James. (1975) *La Iglesia y el Sindicalismo en Costa Rica*. (San José: Ed. Costa Rica).
- Bethell, Leslie. comp. (1993). *Chile Since Independence* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Blakemore, Harold. (1993) “From the War of the Pacific to 1930”, en Leslie Bethell, comp., *Chile Since Independence* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Cerdas Cruz, Rodolfo. (1985) *Formación del Estado en Costa Rica (1821-1842)* San José: Ed. Universidad de Costa Rica).
- Close, David, comp. (1995) *Legislatures and the New Democracies in Latin America* (Boulder: Lynne Rienner).
- Collier, Ruth Berins, y David Collier. (1991) *Shaping the Political Arena* (Princeton: Princeton University Press).
- Collier, Simon. (1993) “From Independence to the War of the Pacific”, en Leslie Bethell, comp., *Chile Since Independence* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Dahl, Robert. (1971) *Polyarchy* (New Haven: Yale University Press).
- Dahl, Robert. (1989) *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press).
- Diamond, Larry. Juan Linz, y Seymour Martin Lipset (1989) *Democracy in Developing Countries*, Volume Four: Latin America (Boulder: Lynne Rienner).
- Drake, Paul. (1993) “Chile, 1930-1958”, en Leslie Bethell, comp., *Chile Since Independence*

- ce (Cambridge: Cambridge University Press).
- Finch, M.H.J. (1981) *A Political Economy of Uruguay since 1870* (London: Macmillan).
- Gil, Federico. (1966) *The Political Economy of Uruguay since 1870* (London: Macmillan).
- Gillespie, Charles. (1991) *Negotiating Democracy: Politicians and Generals in Uruguay*. (Cambridge: Cambridge University Press).
- Gillespie, Charles, y Luis Eduardo González (1989) "Uruguay: The Survival of Old and Autonomous Institutions", en Diamond, Linz, y Lipset, comp., *Democracy in Developing Countries*, volume Four: Latin America (Boulder: Lynne Rienner).pp. 207-246.
- González, Luis (1991) *Political Structures and Democracy in Uruguay* (Notre Dame: University of Notre Dame Press).
- Gudmundsen, Lowell, and Héctor Lindo-Fuentes. (1995) *Central America, 1821-1871: Liberalism before Liberal Reform* (
- Guillén, Agraham. (1973) *Philosophy of the Urban Guerrilla: The Revolutionary Writings of Agraham Guillén* (New York: William Morrow).
- Jiménez Castro, Wilburg. (1977) *Análisis electoral de una democracia* (San José: Ed. Costa Rica).
- Kaufman, Edy. (1979) *Uruguay in Transition* (New Brunswick: Transaction).
- Kinsbruner, Jav. (1973) *Chile: A Historical Interpretation* (New York: Harper & Row).
- Loveman, Brian. (1988) *Chile: The Legacy of Hispanic Capitalism*. Segunda Edición. (New York: Oxford University Press).
- Migone, Raúl, Director. (1940) *Anuario Estadístico Interamericano* (Buenos Aires: el Ateneo).
- Muñoz Guillén, Mercedes. (1990) *El estado y la abolición del ejército, 1914-1949* (San José: Ed. Porvenir).
- Nunn, Frederick. (1976) *The Military in Chilean History* (Albuquerque: University of New Mexico Press).
- Nef, Jorge, y Nibaldo Galleguillos (1995) "Legislatures and Democratic Transitions in Latin America: The Chilean Case", en David Close, comp., *Legislatures and the New Democracies in Latin America* (Boulder: Lynne Rienner).
- Oconitrillo, Eduardo. (1982) *Un siglo de política costarricense*. (San José: Ed. Universidad Estatal a Distancia).

- Oppenheim, Lois Hecht. (1993) *Politics in Chile: Democracy, Authoritarianism, and the Search for Development* (Boulder: Westview).
- Osorio, Jaime. (1990) *Raíces de la democracia en Chile, 1850-1970*. (México: Ediciones Era).
- Panizza, Francisco. (1990) *Uruguay: Batllismo y después* (Montevideo: Ediciones de la Banda Oriental).
- Peeler, John A. (1985) *Latin American Democracies: Colombia Costa Rica, Venezuela* (Chapel Hill: University of North Carolina Press).
- Peeler, John A. (1992) "Elite Settlements and Democratic Consolidation: Colombia, Costa Rica, and Venezuela", en John Higley and Richard Gunther, comp., *Elites and Democratic Consolidation in Latin America and Southern Europe* (Cambridge: Cambridge University Press), pp.81-112.
- Peeler, John A. (1995) "Elites and Democracy in Central America", en John Booth y Mitchell Seligson, comp., *Elections and Democracy in Central America*, segunda edición (Chapel Hill: University of North Carolina Press).
- Pendle, George. (1952) *Uruguay: South America's First Welfare State* (London: Royal Institute of International Affairs).
- Petras, James. (1969) *Politics and Social Forces in Chilean Development* (Berkeley: University of California Press).
- Porzecanski, Arturo. (1973) *Uruguay's Tupamaros* (New York: Praeger).
- Przeworski, Adam. (1991) *Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America* (Cambridge: Cambridge University Press).
- Ramírez Necochea, Herná. (1985) *Fuerzas Armadas y Política en Chile* (Habana: Casa de las Américas).
- Remmer, Karen. (1984) *Party Competition in Argentina and Chile* (Lincoln: University of Nebraska Press).
- Rock, David. (1987) *Argentina, 1516-1987* (Berkeley: University of California Press).
- Rojas Aravena, Francisco y Luis Guillermo Solís. (1988) *¿Súbditos o Aliados? La Política Exterior de Estados Unidos y Centroamérica*. San José: FLACSO.
- Rosenberg, Simon. ed. (1993) *Costa Rica and Uruguay* (New York: World Bank).
- Rovira Mas, Jorge. (1988) *Estado y Política Económica en Costa Rica, 1948-1970* (San José: Ed. Porvenir).

- Salom, Roberto. (1987) *La crisis de la izquierda en Costa Rica* (San José: Ed. Porvenir).
- Schifter, Jacobo. (1986) *Las alianzas conflictivas* (San José: Libro Libre).
- Scully, Timothy. (1992) *Rethinking the Center: Party Politics in Nineteenth and Twentieth Century Chile* (Stanford: Stanford University Press).
- Stallings, Barbara, y Robert Kaufman, comp. (1989) *Debt and Democracy in Latin America*. Boulder: Westview.
- Stone, Samuel. (1975) *La dinastía de los conquistadores: La crisis de poder en la Costa Rica Contemporánea* (San José: Ed. Universidad de Costa Rica).
- United States Senate. (1975). *Covert Action in Chile, 1963-1973* (Staff Report, Select Committee on Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities) (Washington: Government Printing Office).
- Valenzuela, Arturo. (1978) *The Breakdown of Democratic Regimes: Chile* (Baltimore Johns Hopkins University Press).
- Valenzuela, Arturo. (1989) "Chile: Origins, Consolidation, and Breakdown of a Democratic Regime". En Larry Diamond, et al., comp., *Democracy in Developing Countries: Latin America* (Boulder: Lynne Rienner).
- Vanger, Milton. (1980) *The Model Country: José Batlle y Ordóñez of Uruguay, 1907-1915* (Hannover, NH: University Press of New England).
- Vega Carballo, José Luis. (1982) *Poder Político y Democracia en Costa Rica* (San José: Ed. Porvenir).
- Weinstein, Martin. (1988) *Uruguay: Democracy at the Crossroads* (Boulder: Westview).
- Weinstein, Martin. (1995) "Uruguay: The Legislature and the Reconstitution of Democracy", en David Close, ed. *Legislatures and the new Democracies in Latin America* (Boulder: Lynne Rienner).
- Wynia, Gary. (1986) *Argentina: Illusions and Realities* (New York: Holmes & Meier).
- Wynia, Gary. (1995) "Argentina's New Democracy: Presidential Power and Legislative Limits", en David Close, comp. *Legislatures and the New Democracies in Latin America* (Boulder: Lynne Rienner).
- Zeitlin, Maurice. (1984) *The Civil Wars in Chile* (Princeton: Princeton University Press).
- Zeitlin, Maurice, y Richard Ratcliff. (1988) *Landlords and Capitalists: The Dominant Class of Chile* (Princeton: Princeton University Press).

